

C.A. de Santiago

Santiago, uno de febrero de dos mil veintidós.

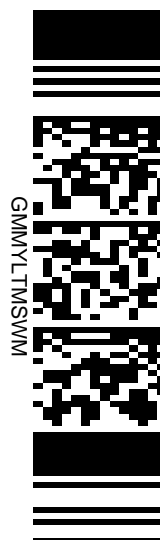
**VISTO:**

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de la última palabra del considerando DECIMO NOVENO “mínimo”, la que se sustituye por “medio”.

**Y se tiene además presente:**

Que se ha alzado en contra de la sentencia definitiva de 31 de agosto de 2020, la defensa del encartado Pedro Octavio Espinoza Bravo, solicitando, en lo medular, la absolución de su representado por falta de participación, concurrencia de la prescripción, en subsidio pide sea recalificada la participación a la de encubridor y en subsidio sea considerado en su favor la amnistía de su presentado, por lo consiguiente pide la disminución de la pena impuesta, además de entender que concurre la minorante de colaboración sustancial para el esclarecimiento de los hechos prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal.

También ha recurrido la Unidad DDHH de la Subsecretaría del mismo nombre, requiriendo a esta Corte que se enmiende la sentencia en aquella parte que rechazó la aplicación de las agravantes de responsabilidad penal establecidas en el artículo 12 N° 8 y 11 del citado cuerpo legal, manifestando al efecto que el acusado a la fecha de comisión del delito era oficial del Ejército de Chile, y que como tal actuó y ejecutó con auxilio de gente armada, sus subordinados de la DINA y su jefe en la misma; personas que le aseguraron y proporcionaron inmunidad. En cuanto a los criterios de determinación de la pena en concreto, solicita se la aumente conforme a derecho, toda vez que discrepa de lo razonado en los considerandos octavo, noveno y décimo, por los que se rechazaron considerar dichas agravantes y finalmente conforme la extensión del mal causado solicita elevar la cuantía de la pena y se le imponga al condenado la de 15 años de presidio mayor en su grado medio.



Por la parte querellante comparecen los abogados Nelson Caucoto Pereira y Andrea Gattini Zenteno, en representación de los hijos de la víctima Matías Fabián, Valeska Isabel y Gladys Andrea, todos de apellidos Moraga Catalán y de la cónyuge Marta Delicia Catalán Navarro, requiriendo que se revoque la sentencia en alzada, desechando la minorante de irreprochable conducta anterior, toda vez que estima no es procedente acoger dicha atenuante conforme los antecedentes ventilados en la causa y teniendo especial consideración en que no basta con que a esa fecha no haya sido condenado, sino que se deben considerar otros antecedentes, citando jurisprudencia al efecto.

También piden que sean consideradas las agravantes del artículo 12 N° 8 y 11 del Código Penal, pues el encausado era oficial del Ejército de Chile, y como tal actuó y ejecutó con auxilio de gente de la armada, sus subordinados de la DINA y su jefe en la misma, personas que le aseguraron y proporcionaron inmunidad.

Por último, solicita que se eleve la pena impuesta a 15 años de presidio mayor en su grado medio.

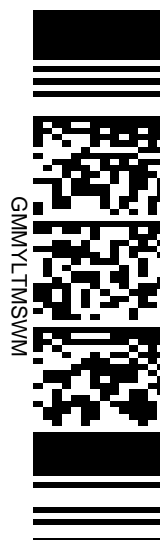
Además de lo anterior, la presente causa se ha elevado en consulta respecto del sobreseimiento dictado el 07 de noviembre de 2019, que rola a fojas 1451.

Se trajeron los autos en relación y se procedió a la vista de la causa, escuchándose los alegatos de los abogados de todas las partes.

#### **CONSIDERANDO:**

**I.- En cuanto a la responsabilidad penal de Pedro Octavio Espinoza Bravo:**

**Primero:** Que la parte querellante ha apelado en contra de la sentencia definitiva de autos, a objeto de que esta Corte revoque la sentencia del grado y condene al encausado a la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio, como autor del delito de secuestro calificado cometido en perjuicio de Juan Héctor Moraga Garcés, previsto y sancionado en el artículo 141 incisos 1º y 3º del Código Penal vigente a la época de los hechos, atendido el mérito del proceso. Asimismo



solicita no sea considerada en favor del encartado la minorante de irreproachable conducta anterior del artículo 11 N° 6 del Código Penal y se apliquen las agravantes del artículo 12 N° 8 y 11 del citado cuerpo legal.

Que como ya se expresó en lo que precede, también ha recurrido la Unidad DDHH de la Subsecretaria del mismo nombre, solicita se revoque la sentencia solicitando se enmiende en aquella parte que rechazó la aplicación de las agravantes de responsabilidad penal establecidas en el artículo 12 N° 8 y 11 del citado cuerpo legal. En cuanto a los criterios de determinación de la pena en concreto, pide se le imponga al condenado la de 15 años de presidio mayor en su grado medio.

**Segundo:** Que, en lo tocante a la comprobación del hecho punible y la participación que le cupo al condenado en el delito de secuestro calificado en la persona de Juan Héctor Moraga Garcés –así como su calificación jurídica–, se comparten plenamente los fundamentos de la sentencia de primer grado, expresados en los considerandos CUARTO a SEPTIMO de la sentencia del grado, que este tribunal de alzada hace suyos, descartándose la petición de absolución requerida por su defensa.

Cabe consignar que, a diferencia de lo planteado por la defensa del condenado, los antecedentes tenidos a la vista por el juez *a quo* satisfacen plenamente las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal para configurar el delito que se revisa por esta vía. En efecto, destacan en este aspecto respecto del delito en estudio, como antecedentes esclarecedores de tal ilícito, que el aludido acusado Espinoza en el mes de julio de 1976 era el jefe de operaciones de la DINA, lo cual se infiere de las declaraciones de Miguel Krassnoff de fojas 1323 en relación a sus funciones al interior de Villa Grimaldi durante el periodo comprendido entre los meses de julio y agosto de 1976, toda vez que se da cuenta que estos consistieron en investigar una parte del movimiento terrorista Mir, y sobre las autoridades del recinto, entiende



que en aquella época eran el brigadier Espinoza, el mayor Mauren Brito y el coronel Carlos López.

Asimismo, de las declaraciones de María Uribe Gomez de fojas 945 se infiere que ella permaneció en la brigada Purén hasta principios de 1976, donde pasó a trabajar con Espinoza, quien tuvo el nombre operativo de don Rodrigo en el cuartel general de la DINA. En su testimonio señaló que Espinoza fue el director de operaciones de la DINA para esa época, en el año 1976, es decir, estuvo a cargo de todas las unidades de inteligencia, operativa, represivas y contrainteligencia, esto es, las brigadas Caupolicán y Purén, y todas dependían de él. Refuerzan lo señalado la copia autorizada de las declaraciones judiciales prestadas por Ricardo Lawrence Mires, en las cuales afirmó, en relación a Villa Grimaldi, que desde que comenzó a funcionar existieron dos agrupaciones, la viga de Caupolicán y la brigada Purén. En este punto afirmó que la brigada Caupolicán estuvo al mando de Mauren Brito en un tiempo, pero en general el jefe de la brigada Caupolicán fue el jefe de la BIM o jefe de Villa Grimaldi. Señaló que todos los cuarteles dependieron de Villa Grimaldi, donde estuvo la brigada de inteligencia metropolitana, cuyos jefes fueron César Manriquez quien estuvo cuando comenzó a funcionar Villa Grimaldi, luego Pedro Espinosa Bravo, Marcelo Mauren Brito, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Rolf Wenderoth y el último que fue Carlos López Tapia. También se suma copia de declaración fojas 944, por la que se manifestó en relación con la eliminación de la estructura directiva del Partido Comunista, que dicha operación, al cabo de la cual resultaron detenidos y desaparecidos del Partido Comunista, fue una operación de la DINA en la cual estuvieron involucradas todas las brigadas, ya que fue el objetivo en ese momento dispuesto por la dirección.

En la sentencia certeramente se concluye que el acusado Espinosa Bravo al momento del secuestro y desaparición de la víctima cumplía la función de coordinar todas las operaciones que realizaba la organización de inteligencia, materialmente las brigadas operativas



vinculadas a la brigada metropolitana, su función estaba vinculada a dar las instrucciones generales para que los agentes que dirigían en la práctica que estas organizaciones delictivas, fuesen capaces a través de los secuestros, encierros en centros clandestinos e interrogados bajo tortura, desarticular a todos los movimientos que se opusieron al gobierno militar; acciones que eran debidamente informadas y que este sentenciado entregaba a la dirección general de la organización.

Su participación culpable y penada por ley de autor mediato del delito se configura con su acción consciente de lo que le acontecía a cada una de las personas secuestradas, ya fuera que eran encerrados sin orden judicial ni administrativa, ya que se les torturara despiadadamente para obtener información acerca de sus acciones y sus compañeros, un ciclo inhumano, cruel y degradante que no siempre terminaba con la libertad de los plagiados sino con su muerte y desaparición, esta información no era desconocida por el acusado Espinoza Bravo y por lo mismo ha de ser responsable en esa calidad del delito que se le imputa.

Que además se ha incorporado el informe policial de 31 de enero de 2018 de fojas 1124, a través del cual se acompañaron antecedentes referidos a los integrantes de la DINA, que fueron parte de los carteles denominados Villa Grimaldi y Simón Bolívar al periodo comprendido al mes de julio a agosto de 1976, con nómina de aquellos agentes vinculados a la persecución de militantes del partido Comunista. Respecto al recinto de Villa Grimaldi o cuartel Terranova, se indica como comandante o jefe del recinto al teniente coronel Carlos López Tapia, en la plana mayor a Eugenio Fieldhouse Chávez, al jefe de la brigada Caupolicán el mayor Marcelo Mauren Brito, como jefe de la brigada Purén el mayor Raúl Iturriaga Neumann. En cuanto a las agrupaciones operativas, se indica como jefe de la agrupación al capitán Miguel Krassnoff, como jefe de la agrupación Águila al capitán Ricardo Lawrence, adjuntando el respectivo organigrama del recinto a la época aludida a fojas 1129. Se hizo presente que las estructuras de cada una de las brigadas y agrupaciones no eran rígidas, por lo tanto es posible



que los agentes se hayan desempeñado en otros equipos o que estos fuesen fusionados o alterados para la ejecución de determinadas tareas.

Que aunque probablemente las fechas no sean exactas, a fojas 1570 se acompañaron documentos referidos a Pedro Espinosa Bravo, consistentes en copia de su pasaporte, el cual corresponde a un viaje realizado entre los días 16 y 24 de julio de 1976 que se agregaron a los autos con citación y no fueron impugnados, lo cual no es indiciario que los mismos posean la fuerza necesaria para cohonestar su conducta dolosa, ya que en sus declaraciones reconoce el cargo que desempeñaba en esa época, esto es director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), y por lo mismo conocedor del destino de cada uno de los secuestrados por motivos políticos por parte de dicho organismo. Además, en sus declaraciones relata que en la época en que estuvo a cargo de Villa Grimaldi nunca vio personas detenidas, una afirmación que se ha comprobado hasta la saciedad que es falsa, y lo desvirtúa todos los documentos que en procesos anteriores se han recopilado, por consiguiente no cabe duda que sus afirmaciones sólo tienden a encubrir su conducta ilícita y no aportan nada a establecer el destino de las víctimas y terminar el calvario de sus parientes.

Que conforme se ha razonado existe la imposibilidad absoluta de considerar la petición subsidiaria de la defensa en cuanto pretende la recalificación de la participación de su representado a la de encubridor, toda vez que ha quedado claro que se encuentra palmariamente acreditada su participación en calidad de autor del artículo 15 N° 2 del Código Penal, como bien lo razona el Juez a quo en el considerando DECIMO NOVENO.

**Tercero:** Que, en cuanto a la solicitud de absolución del encartado fundada en la excepción de prescripción de la acción penal y falta de participación en el delito de secuestro, se comparten los fundamentos de la sentencia de primera instancia de los considerandos UNDECIMO a DECIMO CUARTO. Se tiene además presente que, tratándose de delitos de lesa humanidad, nuestro Máximo Tribunal ha declarado que de acuerdo a una interpretación progresiva y finalista de



la Carta Fundamental, los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen sobre el orden jurídico interno, “puesto que se entiende que la prefieren, perfeccionan y complementan, siendo, por tanto, una normativa posible de invocar por todos los individuos, atendido el compromiso moral y jurídico del Estado ante la comunidad internacional de respetar, promover y garantizar los derechos fundamentales del individuo. Es por ello que en este tipo de transgresiones no es posible invocar la Ley de Amnistía y la prescripción de la acción penal, porque lo prohíbe el derecho internacional de los derechos humanos” (sentencia de la Corte Suprema de 19 de mayo de 2015, rol 25.656-2014).

En cuanto a la falta de participación esta Corte se remite al considerando que precede, conforme se ha establecido la participación de Espinoza Bravo.

**Cuarto:** Que, en relación a la aplicación del artículo 103 del Código Penal impetrada por la defensa del encausado, se comparte el criterio de la sentencia recurrida en orden a desestimarla consignado en el acápite DECIMO QUINTO, puesto que al ser un delito de lesa humanidad –como se dijo–, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza a la gradual, ya que ambas se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional (sentencia de la Corte Suprema de 19 de marzo de 2020, rol 28.138-2018). Debe tenerse presente que, incluso, se ha resuelto que las normas a que se refiere la mencionada disposición otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación de disminuir la cuantía de la pena, aunque concurran varias atenuantes (sentencia de la Corte Suprema de 14 de mayo de 2018, rol 39.732-2017).

**Quinto:** Que también se confirmará la sentencia de primera instancia en orden a desestimar la petición del condenado en orden a reconocérsele la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, esto es, “si ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos.” Tal atenuante no se ha configurado de ninguna forma en autos, desde que Espinoza Bravo ha negado su participación en los



hechos, resultando, además, establecido el hecho punible y su autoría a través de otras pruebas del proceso, incluso algunas ajenas a su intervención.

**Sexto:** Que, respecto de la concurrencia de la agravante del artículo 12 N° 8 y 11 del Código Penal solicitada imponer por la querellante y Unidad DDHH de la Subsecretaria del mismo nombre, esto es, “prevalerse del carácter público que tenga el culpable y ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad”, se concuerda con el razonamiento del sentenciador de primera instancia en el apartado NOVENO y DÉCIMO de la sentencia, toda vez que la calidad de funcionario público forma parte integrante del delito de lesa humanidad que nos convoca. Por ende, conforme al artículo 63 del mencionado texto, dicha circunstancia es inherente al delito objeto de estos autos, lo que conlleva a desestimar la petición de los actores y a confirmar la decisión de primer grado.

**Séptimo:** Que, en lo tocante a la existencia de la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, la irreproachable conducta anterior, se mantendrá lo decidido por la sentencia en alzada en el apartado DÉCIMO SEXTO. En efecto, congruente con lo decidido por el sentenciador de primer grado, se ha resuelto que la tesis mayoritaria “sostiene que la atenuante de irreproachable conducta anterior ha de ser acogida con el solo mérito del extracto de filiación que no registra antecedentes, sin que sea necesario exigir al efecto prueba testifical, habida cuenta del principio de inocencia y buena fe inherente a la persona, recogida en la propia Constitución” (sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 25 de octubre de 2019, rol 1920-2019, así como las sentencias de la Excma. Corte Suprema que allí se citan), que es precisamente lo que acontece en la especie.

**Octavo:** Que en cuanto a la amnistía solicitada por la defensa en favor de Espinoza Bravo, de lo razonado por el sentenciador, en la especie apartado DUODÉCIMO del fallo en examen tiene valor sólo en forma subsidiaria o a mayor abundamiento de lo que pasa a expresarse, tocante a las causales de inimputabilidad que las defensas han hecho





consistir en la amnistía del consabido Decreto Ley 2.191 y en la prescripción de la acción penal;

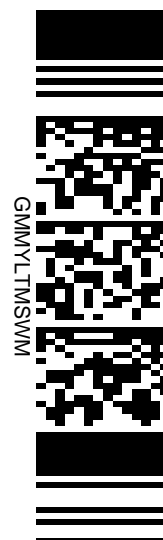
**Noveno:** Que la evolución del derecho a partir de la segunda guerra mundial permite afirmar que en la época de ocurrencia de los hechos materia de este procedimiento, el derecho internacional de los derechos humanos ya condenaba como crimen contra la humanidad el secuestro permanente de personas, llevado a cabo por agentes del Estado por motivos ideológicos, políticos o religiosos.

No debe olvidarse que la Carta Orgánica del Tribunal Militar de Nüremberg incluyó entre los crímenes contra la humanidad “la comisión de otros actos inhumanos contra la población civil”, o “persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos”.

Por Resolución N° 95 (I) de 11 de diciembre de 1.946, la Asamblea General de la ONU confirmó los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Tribunal de Nüremberg y por la sentencia de ese Tribunal. El efecto de esa y de otras resoluciones fue el de consagrar, con alcance universal, el derecho creado en el Estatuto y en la sentencia del tribunal de Nüremberg.

En su informe sobre la constitución de un tribunal internacional encargado de juzgar a “las personas presuntamente responsables de violaciones graves del derecho humanitario internacional cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia” a partir de 1.991 (TPIY), el secretario general de la ONU mencionó algunos instrumentos que, en su opinión, forman parte del *ius cogens*, entre los cuales incluyó el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg de 1.945, además del Convenio sobre el Crimen de Genocidio de 1.948 y los Convenios de Ginebra de 1.949.

La importancia de una tal manifestación radica en que, como el Consejo de Seguridad aprobó ese informe del señor secretario, sin reserva alguna (Resolución N° 827 de 25 de mayo de 1.993), pasó a ser vinculante para todos los Estados, en razón de lo que preceptúa el artículo 25 de la Carta de la ONU.



Agréguese que, como lo afirma el considerando trigésimo segundo de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema el diecisiete de noviembre de dos mil cuatro en su ingreso Rol N° 517-2.004 (casación en el fondo; caso secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez) la descripción que efectúa el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, suscrita el 9 de junio de 1.994 en Belén do Pará, Brasil, que entró en vigencia en el concierto universal el 29 de marzo de 1.996, por haber sido ratificada por el número necesario de naciones de esta parte del mundo, coincide con la del secuestro que aquí se juzga.

**Décimo:** Que esa conducta conlleva la violación sistemática de una multiplicidad de derechos humanos a cuya protección el Estado chileno se comprometió ante la comunidad de las naciones prácticamente en forma contemporánea con su misma génesis, una vez finalizada la segunda guerra mundial, conforme dan irrefutablemente cuenta la suscripción de la Carta de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 1945; de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de 30 de abril de 1948; de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948; y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 2 de mayo de 1948.

**Undécimo:** Que de ahí que no se tolere la prescripción ni la amnistía de las acciones tendentes al juzgamiento de ilícito semejante.

Ya el 26 de diciembre de 1.964 Francia declaró imprescriptibles, por naturaleza, los crímenes que la Resolución 3 (1) de la Naciones Unidas había definido como de lesa humanidad, habiéndole seguido en ese camino, el mismo año, China y Hungría.

El 28 de enero de 1.965 la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa emitió una declaración cuyos puntos 7 y 8 sugerían al Comité de Ministros: 7. Que invite a los gobiernos miembros a tomar inmediatamente las medidas propias para evitar que por el juego de la prescripción o cualquier otro medio queden impunes los crímenes cometidos por motivos políticos, raciales o religiosos, antes y durante la Segunda Guerra Mundial y, en general, los crímenes contra la



Humanidad; 8. Que encargue a un Comité de expertos gubernamentales elaborar una Convención a fin de asegurar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.

Por Resolución N° 3 (XXI) la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aconsejó, en 1.965 estudiar la posibilidad de establecer el principio de que para los crímenes de guerra y los de lesa humanidad no existe en el derecho internacional ningún plazo de prescripción.

Es en esa época que surge el Anteproyecto de Convención elaborado por el secretario general de la ONU, de conformidad con la Resolución N° 1.158 (XLI) del Consejo Económico y Social, en el que se afirma que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido.

Por Resolución N° 2.391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1.968, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, cuyo artículo 1 recogió, en los mismos términos, la declaración de imprescriptibilidad del anteproyecto recién aludido. Entre las justificaciones del acuerdo se hizo referencia a que la aplicación de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes.

Como el principio ya era conocido, la mencionada Convención se limitó a afirmarlo.

**Duodécimo:** Que a partir de entonces la imprescriptibilidad se incorpora al derecho internacional consuetudinario o *ius cogens*.

Para su vinculatoriedad deja de ser necesario el habérsela asumido convencionalmente por el derecho interno.

De hecho, en más de una oportunidad la Asamblea General de la ONU ha instado a su aplicación aunque no se sea Estado parte: Resoluciones Nos. 2.583 (XXIV) de 15 de diciembre de 1.969, 2.712 (XXV) de 15 de diciembre de 1.970, 2.840 (XXV) de 18 de diciembre de 1.971 y 3.074 (XXVII) de 3 de diciembre de 1.973 relativa a los



Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad.

El 25 de enero de 1.974 el Consejo de Europa -Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza y Turquía- firma la Convención Europea sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes Contra la Humanidad y Crímenes de Guerra.

El 18 de diciembre de 1.992 surgió de la Asamblea General de la ONU la Resolución 47/133 o Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Su artículo 17.1 sanciona que mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos se entiende que se trata de un delito permanente. Pues bien, el artículo 7 de la Declaración consagra el principio de la imprescriptibilidad que se viene comentando.

Otro tanto hace el artículo 29 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional o TPI y, más recientemente, en 1.996, el Proyecto de Código de Delitos contra la Paz y Seguridad de la Humanidad.

**Décimo Tercero:** Que los análisis que preceden son igualmente válidos para toda clase de intento de inimputabilidad frente a crímenes contra la humanidad, como es el caso de la amnistía. Por algo la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, en fallo de 14 de marzo de 2.001, que las leyes de amnistía son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que carecen de efectos jurídicos (Chumbipuma Aguirre y otros con Perú, caso Barrios Altos).

**Décimo Cuarto:** Que aparte de lo dicho, la razón de ser de tal inimputabilidad radica, en último término, en la irrenunciable dimensión ética del derecho, para el que no todo mandato normativo es tal por el sólo hecho de revestirse formalmente de legitimidad. Lo sostuvo Tomás de Aquino. También Gustav Radbruch, en su segunda etapa, al tomar



conciencia del genocidio nazi. En nuestros días así lo han resuelto el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en 1.996 y en 2.001, respectivamente, en la causa de los guardianes del Muro de Berlín, a quienes no se les permitió ampararse en la obediencia debida para eximirse de responsabilidad por los homicidios de quienes intentaban escaparse de Alemania Oriental.

Parece ser que no todo delito, como el de lesa humanidad, puede y debe olvidarse. Tal vez sea esta una premisa que integra el derecho constitucional, en su vertiente de la justicia constitucional, que en el caso de Chile tiene asidero a partir del primero de los artículos de la carta fundamental que, en su artículo 5 precisa "...es deber del Estado respetar y promover derechos, garantizados por la Constitución y Tratados Internacionales..."

Por lo expuesto conforme se ha razonado la pretensión de amnistía solicitada considerar por la defensa en favor de su representado no puede prosperar.

**Décimo Quinto:** Que en cuanto a la determinación de la pena y, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. El delito de secuestro calificado, previsto en el artículo 141 inciso primero y tercero del Código Penal de la época, establece la pena de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados y, habiendo establecido que la participación del encausado es aquella prevista en el artículo 15 N° 2 del Código Penal, autor mediato y, que le beneficia una atenuante y no le perjudica agravante, la pena establecida para el delito será la de presidio menor en su grado medio.

**Décimo Sexto:** Que conforme a lo solicitado por los querellantes, se hará aplicación del artículo 69 del Código Penal, especialmente, imponiéndose la pena en el máximo del grado medio, "por la extensión del mal causado", puesto que luego de la detención y traslado de la víctima a un recinto de detención, aún no se tiene noticia de su ubicación y por ello en tales condiciones no fue posible determinar la causa de muerte.



**Décimo Séptimo:** Que de esta forma se disiente de lo informado a fojas 1.764 por la Fiscal Judicial, señora M. Loreto Gutiérrez Alvear, en cuanto fue del parecer de confirmar la sentencia en todas sus partes, en cuanto al delito por el cual fue condenado Espinoza Bravo y el grado de participación del sentenciado, especialmente en cuanto refiere a la cuantía de la sanción impuesta al sentenciado.

**II.- En cuanto a la consulta:**

**Décimo Octavo:** Que compartiendo el parecer de la Fiscal Judicial y dado el fallecimiento del procesado Carlos Jose Leonardo López Tapia, se confirmará la resolución de 07 de noviembre de 2019, que rola a fojas 1451, que sobreseyó parcial y definitivamente la causa a su respecto.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en las disposiciones citadas y lo prescrito en los artículos 414, 415 y 510 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se declara:

**I.-** Que **SE CONFIRMA** la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, escrita de fojas 1636 a 1720, dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria don Mario Carroza Espinosa **con declaración** que **Pedro Octavio Espinoza Bravo** queda condenado a la pena de **DIEZ AÑOS Y UN DÍA** (10 años y un día) de presidio mayor en su grado medio como autor del delito de secuestro calificado.

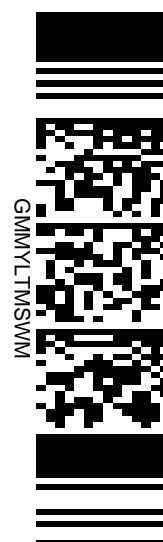
**II.-** Que **SE APRUEBA**, en lo consultado, la resolución la resolución de 07 de noviembre de 2019, que rola a fojas 1451, que sobreseyó parcial y definitivamente la causa respecto de Carlos Jose Leonardo López Tapia.

**Regístrese, notifíquese y devuélvase con sus agregados.**

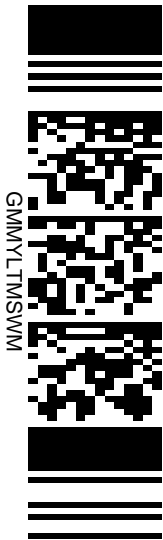
**Redacción del Ministro (S) Alberto Amiot.**

**N°Penal-6052-2020**

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por el Ministro (S) señor Alberto Amiot Rodríguez y por el



Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández. No firma el Ministro (S) señor Amiot por haber terminado su suplencia.



Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, uno de febrero de dos mil veintidós.

En Santiago, a uno de febrero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

